

# TRASPASO DE CAUSAS PENALES AL NUEVO PROCESO PENAL


## DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11505-07

REFERENCIA	Proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para extender la aplicación del procedimiento contenido en el Código Procesal Penal, a los delitos que indica
INICIATIVA	Moción de los diputados Sras. Núñez y Sabat, y Sres. Fuenzalida, Monckeberg (Nicolás), Monckeberg (Cristián), Pérez (Leopoldo) y Verdugo
ORIGEN	Cámara de Diputados
COMISIÓN	De Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
INGRESO	15 de noviembre de 2017
ARTICULADO	Artículo único, que modifica la disposición novena transitoria de la Constitución Política

## **OPINIÓN** EJECUTIVA DE LYD

El proyecto de ley constituye una importante proposición para superar la diferencia entre la aplicación del procedimiento penal antiguo de 1907 y el nuevo del año 2000, respecto de los imputados por crímenes cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del procedimiento penal nuevo, del 2000.

El procedimiento antiguo tiene un carácter inquisitivo y actualmente se lo considera como bastante precario desde la perspectiva de la objetividad e imparcialidad del juzgador. El procedimiento penal actual hace una separación en las funciones de investigación y juzgamiento y consagra varios principios, como el de inmediación, oralidad y publicidad, que lo ajustan a estándares internacionales en materia de la garantía del debido proceso.

Por tanto, la moción tiene sentido en cuanto a las mejores posibilidades de defensa que establece el nuevo código; sin embargo, distingue, para su aplicación, los delitos con penas de crimen, de los que tienen penas de menor gravedad, a los que no se aplicaría el nuevo código, sin que exista una razón jurídica para ello. Por otra parte, otorga al imputado la facultad de requerir que se le aplique el nuevo proceso, lo que, tratándose de materias de derecho público, se debería determinar por ley en forma imperativa 

## **CONTENIDO DEL** PROYECTO DE LEY

Se faculta a los actualmente procesados por un crimen cometido antes de la entrada en vigencia del nuevo código Procesal Penal del año 2000 (proceso que se debe estar tramitando conforme al antiguo Código de Procedimiento Penal, de 1907), para solicitar que su proceso se tramite conforme al Código Procesal Penal vigente (del 2000) ■■■■

## IV. COMENTARIOS DE MÉRITO

### ANTECEDENTES

La disposición octava transitoria de la Constitución Política de la República (CPR), en la cual incide el proyecto que se comenta, vino a solucionar un problema práctico, pero de contenido jurídico, derivado de la dictación del nuevo Código Procesal Penal. En efecto, durante la tramitación del respectivo proyecto, así como del proyecto de ley que dio origen a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, se observó que sería muy difícil o imposible poner en vigencia en todo el territorio nacional, en forma simultánea, tanto al nuevo Código como su complemento necesario, esto es, el funcionamiento de los fiscales del Ministerio Público.

Para ello se concibió la idea de disponer una entrada en vigencia en forma paulatina, primero en unas regiones y luego en otras; pero ello suponía una vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, puesto que las personas quedarían, en el territorio nacional, sujetas a distintas normas procesales no obstante haber incurrido en delitos similares, por el solo hecho de haber ocurrido los hechos en regiones distintas. Para ello se decidió que la propia CPR autorizara una vigencia progresiva del nuevo Código, y en las disposiciones transitorias de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público (N°19.640), se estableció –dada la autorización constitucional– la vigencia escalonada en el tiempo, entre las distintas Regiones, plazo que se extendió desde el año 2000 hasta el 2005, cuando entró en vigencia en la Región Metropolitana, quedando así todo el territorio nacional sujeto a la nueva normativa procesal desde el 16 de junio de ese año.

Si bien la vigencia progresiva genera una desigualdad ante la ley, ello no es objetable formalmente, desde el momento que la propia Constitución así lo estableció.

### NORMA DE EXCEPCIÓN

La disposición octava transitoria, luego de autorizar la vigencia progresiva, dictó una excepción, relativa a hechos (constitutivos de delito) que hubieren ocurrido antes de la entrada en vigencia del nuevo Código en la respectiva región. Este precepto, inciso segundo de la disposición transitoria octava, autorizó una nueva diferenciación en el trato que el Estado debe dar en materia de enjuiciamiento criminal, puesto que los delitos cometidos antes de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2005, dependiendo de la región, quedarían para siempre sujetos al antiguo Código de Procedimiento Penal, de 1907. Es a este precepto que, concretamente, se refiere la reforma constitucional que se analiza.

## LA REFORMA PROPUESTA

La proposición consiste en facultar a los imputados por un crimen cometido antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal penal, para solicitar que su enjuiciamiento se tramite conforme dicho nuevo Código. Esta proposición merece los siguientes alcances y comentarios.

1. La tramitación conforme a la norma antigua, de los procesos anteriores a la vigencia del Código, si bien constituye una diferenciación, no parece ser infundada o arbitraria, dado que la aplicación de la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho, resulta ser consistente con un adecuado criterio de aplicación de la ley en cuanto al tiempo. De esta forma se hace coincidir el hecho sometido a conocimiento del tribunal, con el ordenamiento jurídico vigente al momento en que se cometió el hecho.

Sin embargo, dado que el nuevo código, calificado como “garantista”, otorga mejores instrumentos de defensa al imputado, se sigue que los procesados conforme al Código antiguo quedarían en una situación desmejorada. El detalle de estas diferencias excede el análisis de este proyecto, pero baste señalar que en el procedimiento penal de 1907, modificado sustancialmente en 1927 al suprimirse los promotores fiscales, el mismo juez que investiga los hechos, es el que acusa al responsable del delito y luego puede acoger o desechar la acusación que él mismo formuló. Lo esperable en esa circunstancia, es que el acusado resulte siempre o casi siempre condenado, pues si el juez encontró mérito para procesar (esto es, que existe un delito legalmente probado y al menos presunciones fundadas de participación), lo más probable es que el proceso termine en sentencia condenatoria, quedando la defensa

circunscrita a buscar a lo más una rebaja de la pena.

El nuevo procedimiento dejó la función de investigación y de acusación a cargo del fiscal y confió la decisión de fondo o sentencia definitiva al órgano sentenciador que, además, ahora es colegiado.

Así, la proposición de someter a los procesados por delito cometido bajo la vigencia del Código de 1907, al nuevo código de 2000, tiene sentido, en función de las mejores posibilidades de defensa que establece este nuevo cuerpo legal.

2. Los delitos por los cuales procedería la facultad procesal para solicitar el cambio al nuevo código, son los que tienen pena de crimen, que de acuerdo a la escala de penalidad del artículo 21 del Código Penal, son, en general, los sancionados con presidio o reclusión mayores en cualquiera de sus grados, esto es, con pena igual o superior a los 5 años y un día.

La pregunta que surge es por qué no se otorgaría similar tratamiento a los procesados por simples delitos, cuya pena se extiende de los 61 días a los 5 años; o por faltas del Código Penal, sancionadas con prisión de 1 a 60 días. Una explicación podría encontrarse en el hecho que las penas menores suelen ser objeto de medidas alternativas, por lo que las falencias del antiguo procedimiento tendrían una menor incidencia en el resultado práctico del juicio; no así las penas más graves que suelen ser de cumplimiento efectivo.

También es posible suponer que un traspaso masivo de causas del antiguo sistema al nuevo, podría generar una sobre carga, si bien se ignora qué número causas se mantienen

sometidas al proceso penal antiguo, las que parecen ser en su mayoría relativas a delitos cometidos por agentes del Estado en el ejercicio de sus cargos (detención ilegítima, apremios ilegítimos, homicidio y otros).

Con todo, no se observa una razón clara, desde el punto de vista jurídico, para hacer la diferenciación que propone el proyecto.

3. La norma propuesta, al no perseguir el traspaso masivo de las causas antiguas al nuevo sistema procesal, opta por otorgar un derecho al procesado, que podrá ser ejercido o no, según estime que le sea conveniente. No habría, entonces, una norma procesal objetiva e imperativa para traspasar las causas, que es la forma como suele legislarse en este tipo de materias, que se insertan en el derecho público; lo propio en estos ámbitos es que la ley determine la norma de procedimiento que se deba aplicar, y no que el particular afectado elija y solicite a la judicatura un cambio de normas de procedimiento.

4. El proyecto otorga el derecho a los imputados del antiguo sistema procesal penal, expresión que, corresponde señalar, no es equivalente a la del nuevo proceso penal. En efecto, en el antiguo sistema puede distinguirse claramente al imputado del procesado. El primero es la persona sospechosa de haber delinquido, mientras que la segunda ya ha sido objeto de una decisión judicial que la somete a proceso (auto de procesamiento).

En el nuevo proceso, el imputado es la persona contra la cual se dirige la investigación mediante la formalización, esto es, la comunicación al imputado de procederse judicialmente en su contra. En el nuevo proceso no existe el equivalente del auto de procesamiento.

Así, entonces, la proposición otorgaría el derecho de pedir el traspaso al nuevo sistema, desde que la persona haya sido citada a declarar como inculcado, sin que sea necesario que se hubiera dictado auto de procesamiento en su contra. Lo cual es consistente con la finalidad perseguida por el proyecto de reforma constitucional ■■■

# V. TEXTO DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

---

**Artículo único:** Agrégase a la disposición transitoria octava de Constitución Política de la República<sup>1</sup>, un inciso final del siguiente tenor:

“Lo dispuesto en los incisos anteriores, es sin perjuicio del derecho que tienen quienes sean imputados por delitos sancionados con pena de crimen, cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público; de requerir su formalización en base al procedimiento y las reglas del Código Procesal Penal.”.



---

<sup>1</sup> Disposición vigente:

OCTAVA.- Las normas del capítulo VII “Ministerio Público”, regirán al momento de entrar en vigencia la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Esta ley podrá establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas materias y regiones del país.

El capítulo VII “Ministerio Público”, la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones.